

FRONTERAS DEL DERECHO INTERNACIONAL

# Universal y asequible

La pandemia que sufrimos desnudó las lógicas estatales de salud pública. Por décadas las políticas de prevención, atención e investigación redujeron sus presupuestos, y de ahí que al inicio de la crisis se hizo palpable el reducido inventario de material de protección sanitario y, al mismo tiempo, la escasez de unidades de cuidados intensivos y respiradores artificiales. De ahí la necesidad de los tempranos y estrictos confinamientos antes que los servicios sanitarios colapsaran.



**ERIC TREMOLADA**  
Dr. En Derecho Internacional y relaciones Int.  
eric.tremolada@uexternado.edu.co

Ahora, en medio de las medidas que tienden a relajar los confinamientos, los déficits de recursos y políticas se traducen en la capacidad de realizar pruebas tempranas, hacer la trazabilidad de los contactos y poder aislar y separar a los infectados, de lo contrario volveremos a los confinamientos plenos de forma periódica.

El panorama no es alentador, si recordamos que en tiempos de normalidad el desarrollo de vacunas es un proceso largo, costoso y arriesgado, agravado por la carrera contra el tiempo en la que estamos. Dificultades científicas que conviven con un perverso sistema de innovación y comercialización que diferencia entre pacientes ricos y pobres. Los programas rutinarios de inmunización no solo dependen del precio de las vacunas, sino de los altos costos de su distribución.

Si no sumamos esfuerzos colaborativos transfronterizos, no saldremos pronto de la pandemia. Ya existen ejemplos: primero, la *Alianza de Vacunas (Gavi)*, asociación público-privada que nació en 2000 y ayuda a vacunar a casi la mitad de los niños del mundo contra enfermedades infecciosas mortales, tiene la experiencia de sus socios y puede colaborar en el acceso a la inmunización en los países pobres y, segundo, la *Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias (Cepi)*, de 2017, asociación global que reúne esfuerzos de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil con el fin de acelerar el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes y permitir el acceso equitativo a estas.

## LOS DÉFICITS DE RECURSOS Y POLÍTICAS SE TRADUCEN EN LA CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS TEMPRANAS

Para enfrentar el covid-19, *Cepi* entiende que lo que acelerará la creación de una vacuna es contar con un número amplio de candidatos y ensayos clínicos, de ahí, su llamado a reunir US\$2.000 millones; mientras *Gavi*, por un lado, quiere, asegurar una vacuna universal y asequible y, por otro, mantener y extender los programas de inmunización frente a otras enfermedades mortales, ocultas tras la pandemia actual.

La Unión Europea se suma y promueve una “respuesta global” junto a la *OMS* para desarrollar acceso equitativo a diagnósticos, terapias y vacunas seguras, de calidad y asequibles. Invita a países y organizaciones a comprometerse a ayudar a alcanzar el objetivo de €7,5 billones de euros. Las fundaciones privadas asumen un rol protagónico, tanto la de **Bill y Melinda Gates** como *Wellcome Trust*, que apuntalan los esfuerzos de *Cepi* y *Gavi*.

En la columna anterior hablamos del sin sentido de responder unilateralmente a la crisis, compitiendo por adquirir medios de diagnóstico y crédito, contrario a la respuesta global, más eficiente y justa, que invita a soñar con un sistema de salud global, que podría financiarse como el *Gavi* que tiene un Servicio Financiero Internacional para la Inmunización (IFFIm) que coloca Bonos de Vacunas en los mercados de capitales contra promesas de donaciones a largo plazo.



**LEOPOLDO FERGUSSON**  
Profesor Asociado, Facultad de Economía, Universidad de los Andes

La semana pasada le llovieron críticas a la vicepresidenta **Marta Lucía Ramírez**. Quizás inspirada en **John F. Kennedy**, pero con peor prosa, dijo que con esta pandemia la cosa no es “atenidos a ver qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. Es qué hacemos nosotros para que el país progrese”. Ella respondió disculpándose, aclarando que no se refería a los hogares que reciben un apoyo del *Gobierno* por la crisis, e insistió en que la sacaron de contexto y no merece el linchamiento mediático.

Como lo reportó este diario, comparándonos con pares en la región los apoyos colombianos a los hogares pobres y vulnerables no lucen nada generosos. Es pertinente entonces la aclaración porque la Vicepresidenta estaría tildando de hiper-atenido, de paso, a todo el continente. Y ni hablar a los ciudadanos del mundo desarrollado.

Pero sus palabras no dejan de despertar algunas preguntas.

La primera es sobre la concepción que tiene la funcionaria de las prestaciones y seguridad social. Afirmó: “necesitamos que los trabajadores hoy valoren sus empresas más que nunca, agradezcan la bendición de tener un trabajo formal, unas prestaciones, una seguridad social”. Llamativo que considere obra divina que un trabajador reciba en su trabajo lo que le co-

rresponde por derecho. Yo pensé que había que agradecerle a nuestra Constitución que consagra el derecho a un trabajo digno y justo, no a Dios.

Aunque en la misma intervención la Vicepresidenta destacó la importancia de formalizar a las empresas, su lenguaje refleja esa norma social permisiva con la informalidad que, junto a otros problemas, dificulta combatirla. Con razón en Colombia tener un trabajo formal es un privilegio. Con razón, también, hay empresas como *Rappi* que sin sonrojarse se declaran la nueva alternativa de ingreso para cientos de miles de personas que, al mismo tiempo, no son sus empleados, sino sus usuarios. Que agradezcan la bendición de tener ARL, supongo.

La segunda pregunta que surge es quiénes son los atenidos. No encontré esa aclaración en las declaraciones de la Vicepresidenta. Pero podemos especular.

Mi lista la encabezan las empresas y sectores que hoy reciben millonarias exenciones que pagamos los demás contribuyentes. Esos regalos, los de siempre y los que repartió este gobierno con su Ley de (Des)financiamiento, producen al menos siete plagas: erosionan el recaudo, crean un sistema tributario complejo y difícil de administrar, facilitan la evasión y elusión, desnivelan la cancha creando inequidad y afectando

la productividad, transfieren rentas a grupos poderosos de forma poco transparente, son muy difíciles de eliminar y promueven la búsqueda de más regalos.

Por eso, insisto en que esta coyuntura es ideal para tomar la bandera de la Vicepresidenta, eliminar exenciones y subsidios diferenciados, y más bien reducir la tasa de tributación sobre todas las empresas. Coincide **Eduardo Lora** en su análisis reciente sobre las reformas que se vuelven más necesarias (y posibles) con la crisis cuando dice que eliminar exenciones perjudica a grupos de interés, pero beneficia a las demás empresas y a todos los consumidores.

También puntúan en el ranking de los atenidos los colombianos de ingresos y patrimonios altos. Empecemos por reconocer que, en promedio y sin negar las excepciones, su fortuna obedece más a la lotería de la cuna que a otros factores. Sin embargo, viven en un régimen tributario que no atiende al llamado de la Vicepresidenta, que en sus declaraciones invitó a: “tomar consciencia de la solidaridad, de la responsabilidad que tenemos con todos.”

Un mecanismo central de solidaridad en una sociedad es la tributación al ingreso personal. Pero en Colombia las tasas efectivas sobre el ingreso de las personas son muy ba-

# Covid-19 y la consulta previa



**CAMILO MARTÍNEZ**  
Socio DLA Piper Martínez Beltrán

La consulta previa hace prácticamente imposible que la infraestructura sea el motor que permita impulsar la economía colombiana luego del duro golpe sufrido por el covid-19.

Nadie duda que la reactivación de la economía requiere del sector de la construcción. Lastimosamente la carrera que debemos correr frente a nuestros vecinos y demás países pares la tenemos perdida gracias a que nuestro marco jurídico le impone todo tipo de obstáculos a los proyectos de infraestructura y, en general, a las grandes obras de interés nacional. Y si de trabas se trata, la medalla de oro se la lleva la consulta previa establecida en nuestro ordenamiento a través de la Ley 21 de 1991.

En Colombia se han ejecutado más de 5.000 procesos de consulta previa, desde 1991. Prácticamente una consulta cada dos días. Por su parte, en Perú se han realizado 30, en Chile 38 y en Bolivia 44 consultas, países estos que tienen una población indígena muy superior a la colombiana.

Pero esas miles de consultas previas no se han traducido en obras de infraestructura. Por el contrario, centenares de proyectos muy importantes para el país se han visto paralizados gracias a la imposibilidad de darle conclusión a las consultas.

Sin contar con los proyectos de infraestructura que ni siquiera inician por esta misma inseguridad jurídica.

En los casi 30 años de la Ley 21 de 1991, todavía no se han definido los pueblos que tienen derecho a ser consultados. Lo que sí es un hecho es que donde se prevea adelantar un proyecto de infraestructura nace a los pocos días una nueva comunidad afro o indígena que exige ser consultada, haciendo uso de la tutela y del sobre garantismo que ha ofrecido la *Corte Constitucional*. Quienes hemos estado cerca de proyectos de infraestructura, vemos cómo los líderes de las comunidades se toman años para negociar sus condiciones, para en casos terminar solicitando efectivo y hasta televisores y electrodomésticos de todo tipo. Este abuso no puede estar avalado por el ordenamiento jurídico.

## EN COLOMBIA, SE EJECUTA PRÁCTICAMENTE UNA CONSULTA CADA DOS DÍAS

La protección, incluso, ha llegado al absurdo de revocar licencias ambientales ya otorgadas a proyectos que, según el mismo *Gobierno*, no debían agotar consulta previa alguna. Por ejemplo, la *Corte Constitu-*

*cional* a través de la sentencia T-849 tumbó una licencia ambiental que tenía más de tres años de antigüedad. No puede consentirse que para lograr el cometido de proteger a las minorías, deban proferirse decisiones que, además de generar incertidumbre jurídica, sacrifican impunemente los derechos adquiridos.

De manera que a la mayoría de los colombianos se nos ha privado de gozar de una infraestructura que se compadezca con el siglo XXI gracias a la sobreprotección exagerada que nuestro ordenamiento jurídico le ha otorgado desde 1991 a las minorías.

Ha llegado la hora de que el *Gobierno Nacional* tome el toro por los cachos y le de prevalencia a los intereses de la Nación y a los desafíos de nuestra sociedad, justo en estos momentos del covid-19, en los que se requiere generar empleo masivo y riqueza colectiva, como los que surgen de los proyectos de infraestructura. Por esta razón, dentro del marco de la emergencia económica, el *Gobierno* debe considerar, con urgencia, la conveniencia de proceder a expedir un decreto que racionalice las consultas previas y nos permita llevar a cabo los megaproyectos, cuyo aplazamiento permanentemente nos mantiene anclados en el siglo XIX.